**RECENSIÓN: LARRAURI, HELENA,
*CRIMINOLOGÍA CRÍTICA Y VIOLENCIA DE
GÉNERO* :TROTTA, 2018, 152 PÁGINAS, 2º
EDICIÓN**

Valentina Cerón Hernández

valentinaceronh@gmail.com

Ayudante del Departamento de Derecho Penal, Universidad Andrés Bello

En este libro la autora analiza el problema de la violencia de género aportando reflexiones desde una perspectiva criminológica, penalista y feminista. Además, en todos los capítulos del trabajo plantea una crítica al discurso feminista oficial y a la respuesta que ha dado el Derecho penal al problema. Finalmente realiza un estudio a la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género de España (LOVG).

En el primer capítulo plantea sus principales críticas al feminismo oficial, en relación con la manera que este ha enfrentado el problema. En este sentido, las características que advierte son: la simplificación excesiva de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja al presentar que esta sucede «por el hecho de ser mujer»; el razonar en forma excesivamente determinista en cuanto a la desigualdad de género, ignorando la existencia de otras desigualdades; y, por último, la utilización del Derecho penal como un instrumento adecuado para solucionar el problema de la desigualdad estructural (p. 15 y 16). Sobre la base de estas tres características desarrolla su análisis en torno a explicar por qué un problema tan complejo, como es la violencia de género, no puede tener una única variable —la desigualdad—, sino más bien se deben añadir otros factores de riesgo relevantes, por ejemplo, la personalidad de los agresores, los mayores índices de violencia contra las mujeres que viven en ciudades, pertenencias a minorías étnicas, entre otros (p.29-30).

Por otro lado, se aboca a derribar mitos que ha implantado el discurso del feminismo oficial como verdades indiscutibles, a modo de

ejemplo, la enfática expresión que la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres está guiada por ejercer el poder y mantener el control, como también el eslogan de que «toda mujer puede ser víctima» (p.33). Sobre esta última expresión manifiesta, que si bien parte de dicha expresión es cierta, pues toda mujer puede llegar a ser víctima, no toda mujer tiene el mismo riesgo de ser víctima de violencia doméstica. Destaca el problema que genera dicha expresión como una verdad indiscutible, toda vez que impide que se realicen políticas específicas para determinados colectivos de mayor riesgo, debido que al desconocer el grupo social al cual pertenece la víctima producirá el efecto contrario, esto es incrementar el riesgo y la vulnerabilidad de la mujer (p.39).

En el segundo capítulo, rechaza la criminalización de un problema social como lo es la violencia de género. Planteando que el movimiento feminista en su origen era consciente de los peligros que existen cuando se recurre al apoyo del Estado y, particularmente al Derecho penal. Al parecer el actual movimiento feminista se ha apartado de dicho planteamiento, es más, ha recurrido al Derecho punitivo, pretendiendo a través de este solucionar la desigualdad estructural de las mujeres, la discriminación y las relaciones de pareja, siendo todos ellos objetivos que están más allá de sus posibilidades (p.65). Sobre este punto deja de manifiesto que no es obra del feminismo la ampliación del Derecho penal, más bien se trata de una forma de gobernar a través del delito, lo que ha auspiciado el crecimiento de un feminismo oficial (p.72).

En consecuencia, plantea la existencia de un recurso desmesurado al Derecho penal. A modo de ejemplo indica que se ha apostado por la elevación de penas como un mecanismo adecuado hacia la protección de las mujeres denominándolo «feminismo punitivo» (p.56). Tropezando esa visión con las propias críticas de otros grupos feministas, quienes manifiestan la excepcionalidad del sistema penal, toda vez que cuando las mujeres acuden a este se encuentran más interesadas en la protección que el castigo (p. 68). En este sentido, manifiesta lo erróneo de insistir en la denuncia como requisito previo para acceder a protección, debido que restringe la autonomía de la mujer (p. 76).

Desarrolla la tesis ya conocida en el Derecho penal, sobre que la elevación de penas no es el mecanismo idóneo para conseguir una mayor protección de las mujeres. Aporta datos a través de un gráfico, del que se deduce que la elevación de penas no necesariamente acarrea una disminución en la cifra de mujeres muertas, en pocas palabras, la violencia, al ser un problema complejo, debe ser abordado con leyes integrales, quedando de manifiesto que «la amenaza de la pena no representa disuasión alguna» (p. 63 y 64). Además, al elevar las penas son vistas por los jueces como absolutamente desproporcionadas, tendiendo a argumentar en contra de ellas y, en definitiva, dejar de aplicarlas (p.77).

Para concluir este capítulo, la autora destaca, la existencia de otras voces del feminismo que trabajan con mujeres afectadas y que ven con ambivalencia la expansión del sistema penal, pero de todas maneras no logran evitar recurrir a él. Frente a esto, invita a que la doctrina penal progresista debata con los grupos feministas para abordar soluciones que busquen aumentar la protección de las mujeres y minimizar el Derecho penal, «renunciando a privilegiar la voz del feminismo oficial como si fuera *el* feminismo» (p.82).

En el último capítulo, realiza un resumen de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género de España (LOVG), destacando de manera positiva su «carácter integral» (p. 84), pero reconociendo un feminismo punitivo en ella. La LOVG, limita el concepto de violencia de género a violencia doméstica, lo que acarrea como consecuencia que siempre se requiera de una mujer pareja, excluyendo de su ámbito de protección a las madres y las hijas. Desconoce la voluntad de la víctimas, privilegiando la intervención del sistema penal, toda vez que se requiere de la denuncia penal como condición para acceder a ciertos recursos o protección que contempla la ley. Además de lo anterior, se produce un incremento de las penas, siendo para la autora una medida ineficaz, pudiendo ser incluso contraproducente, debido a la no aplicación de los tipos penales agravados por parte de los jueces (p.109). Siendo estas ideas contrarias a las ya manifestadas por la autora en sus capítulos anteriores.

Por otro lado, el lenguaje empleado por la autora es claro y amigable con el lector, además de ser muy ejemplificador al corroborar sus conclusiones con datos aportados de manera ilustrativa a través de gráficos. Cabe destacar el gran aporte que genera el libro a la discusión sobre el tema de violencia de género, que cada cierto tiempo se vuelve a poner en la palestra tras la comisión de delitos en contra de mujeres, lo que hace volver a las discusiones que desarrolla la autora. Larrauri deja de manifiesto que su intención no es atacar el feminismo, sino más bien fortalecer su discusión, lo que logra desarrollar de una manera honesta, mostrándose como una criminóloga, feminista, pero no punitivista, lo que abre el debate a los distintos grupos de feminismo que pueden desarrollarse e invitando a generar discusión para lograr soluciones hacia una verdadera protección de las mujeres víctimas de violencia

Para terminar, creo que si bien la autora se hace cargo de la importancia de reconocer el grupo social concreto al cual pertenece la mujer víctima de violencia, olvida aquellas mujeres que se encuentran privadas de libertad que sufren de violencia de género al interior de los centros penitenciarios. Sobre este punto Ángela Davis, manifiesta el abuso sexual que se desarrolla a través de los llamados «registros corporales exhaustivos», en donde el Estado esta directamente implicado en la rutinización del abuso sexual, siendo además los sistemas carcelarios instituciones

que perpetua la violencia contra las mujeres¹. Larrauri podría ir mas allá en su obra e incorporar a estas mujeres en la discusión, toda vez que también son mujeres que sufren violencia y necesitan protección.

Referencia bibliográfica:

DAVIS, Á. (2016). *Democracia de la abolición, prisiones, racismo y violencia*. Madrid.

¹ DAVIS, (2016), pp. 71-89